

CON RAZON O SIN RAZON.

Concediéndole en uno de nuestros artículos anteriores a la polémica suscitada por *El Triunfo* y la *Discusión* con motivo de los sucesos de Alguirre, tratamos de demostrar que no podíamos entendernos con aquellos colegas por las falsas interpretaciones que hacían de nuestras palabras, y la falta de lógica y de claridad de conceptos que se observaba en sus escritos.

Hay nos proponemos señalar el principal escollo con que tropezamos, no ya en una discusión sobre un hecho determinado, sino en casi todas las que sostenemos con la prensa liberal cubana; y no movemos a señalar ese escollo algunas frases que nos ha dedicado *El Triunfo* en una de sus notas políticas.

Dicen los diarios autonomistas que podemos seguir con esa multitud que consiste en llamarlo insurrecto a cada paso, pero que no llevemos el insulto hasta el punto de confundir a los criminales comunes con los insurrectos.

Respecto a multitud, ó grupos, con perdón del colega, que sólo concurremos en la prensa de la Habana, y las dos del resto exclusivo de los periódicos liberales. Constele una de ellas en decir directamente, y así justificarlo, que los llamamos insurrectos, y la otra se reduce a manifestar todos los días que somos carlistas y conspiradores, tratando de apoyar esta acusación en argumentos tan pobres y tan poco dignos como los que se pueden sacar de aquellos famosos artículos que se recurren a nuestros adversarios para sorprender la buena fe de la redacción de *La Voz de Cuba*.

Más importante que lo de la multitud es lo que dice *El Triunfo* sobre nuestro empeño en confundir a los insurrectos con los criminales comunes. No sería fácil al colega demostrar que nos hayamos empeñado nosotros en crear esta confusión. No eran redactores de *La Voz*, por ejemplo, los que nombraron general insurrecto al facineroso Orlán García. Así pues, el existe la confusión de que habla *El Triunfo*, si la ha observado en la conciencia pública, culpa de ella a los que no repararon en medios para conseguir que fuese durante la guerra separativa.

Pero ya que confundimos no trata, ¿sea nos permitido hacer observar a *El Triunfo* que si ya amigos son los que confunden lastimosamente unas insurrecciones con otras, al creer que todas ellas constituyen delitos políticos. En equivocación es que viven los liberales cubanos en el escollo de que habíamos antes, el obstáculo que se interpone entre ellos y nosotros, haciendo imposible toda buena inteligencia en nuestras discusiones.

Ya en otra ocasión, tocando, aunque ligeramente, la cuestión importantísima de los delitos políticos, citamos, si no en la fe de nuestra memoria, estas descorazonadoras palabras de un jurisconsulto cubano:

«Es preciso que sea verificado un trastorno de gran consideración en las ideas humanas, para que los delitos políticos hayan llegado a verse de la manera que se ven en nuestra sociedad.»

Si aquel escritor ilustra se acordaba de la injusticia que la opinión pública concede a los delinquentes políticos, cuando acepta, respecto a sus delitos, la inmutabilidad de los actos consumados, ¿cuál sería un suceso si hubiera podido sospechar que llegarían a ser confundidos en la categoría de delitos políticos aquellos que llama el Código *delitos de traición*?

Pues bien, la prensa liberal de Cuba es víctima de una confusión deplorable; y, por efecto de ella, no solo esconstruye natural y justificable la insurrección separatista de 1895, sino que aplando sin reserva a los que en ella tomaron parte, diciendo que cumplieron con su deber de conciencia, lo cual no puede más de alarmar a los que, aceptando de buena fe el *delito de traición*, y perdonando sinceramente a los que delinquieron, consideran altamente peligroso é inhumano que se santifique un delito, y un delito que, en buena doctrina, no puede caberle a aquéllos con el velo de la política, para conseguir la injusticia que a los delitos políticos suele concederse.

Acabamos de explicar lo que la prensa liberal de este país llama nuestra *intencionalidad*. Pero ¿gamos mal en no querer transferir con un error de doctrina que puede convertirse en un peligro para la integridad de la patria?

No parece que no, y consideramos un deber nuestro disipar la confusión de ideas que reina en los periódicos liberales sobre delitos políticos.

Entendemos por delitos de esta clase los que llevan por objeto subvertir la constitución del Estado.

Esta definición no es nuestra. La tomamos de un célebre tratadista de Derecho Penal, y expresa perfectamente lo que en todos los países civilizados se entiende por delitos políticos.

Para que un delito pueda ser considerado como político, es necesario que proceda de ideas políticas, pero de ideas que se refieren a las políticas internas de un Estado, no a la política exterior, no a la independencia ni a la integridad nacional.

Ahora bien; ¿propusieron los insurrectos de Cuba subvertir simplemente la constitución de España, ó era más trascendental la subversión a que tendían sus esfuerzos? ¿eran defensas de política interna las que los incitaron a la rebelión, ó eran divisiones más profundas las que enredaron aquella odiosa y prolongada guerra?

Oslo parece contestar a estas preguntas. Han transcurrido muy pocos años para que borren de la memoria de los habitantes de Cuba sucesos que nunca olvidaremos bastante. Todos ellos conocen los fines a que tendían las dos últimas insurrecciones; y conociéndolos, no es posible considerar como delinquentes políticos a los que en aquellas tomaron parte. El delito de estos corresponde a distinta categoría, no consistió en atentar interiormente contra la forma del Estado, ni contra su constitución, sino contra la integridad nacional; y la diferencia entre una y otra clase de delitos está elementalmente expresada,

por el jurisconsulto a que antes aludimos, en las palabras siguientes:

«Más allá que el Rey, que la Constitución, que todas las formas sociales, es la patria misma; y no es necesario que se seque de intención contra esta cuando son aquellos los términos que la acción criminal. Pero el que delinque contra la seguridad exterior del Estado, se destruye la existencia de la patria misma, y se destruye, no los accidentes, sino la esencia, el ser mismo de la sociedad que le vio nacer. Es un partido público el que comete, para el que difícilmente encontrará, no digamos una justificación, ó una atenuación, pero ni una explicación alguna, que salve al su propósito ni su honra.»

Y no es necesario que el delito cometido por los insurrectos cubanos ha sido cometido en el Código Penal vigente en Cuba en la categoría de los delitos contra el orden público.

Bajo el punto de vista de los hechos, constatamos que esos Códigos no habrían sido promulgados cuando estaban las ideas insurreccionales; y bajo el punto de vista de la doctrina, si hubieran observado que en nada altera la solidez de lo que hemos expuesto, esa modificación del Código, toda vez que en este no se declara, ni mucho menos, que el delito de rebelión sea, en todos los casos que enumera, un delito político; debiendo observar que en el informe de la Comisión que presentó el proyecto de aquel Código, no se explican los motivos de la modificación que estamos ocupándonos, como no se explican los de algunas otras que contiene.

Expuesta la distancia que separa a los delitos propiamente llamados políticos, de esos otros delitos que parecen deberse de conciencia a la prensa liberal cubana, queda explicada nuestra *intencionalidad* en este punto; y estamos seguros de que en esta santa intencionalidad nos acompañan todos los partidos políticos de España.

Todos ellos han aplaudido reentramos las nobles frases del Sr. Cánovas del Castillo, al explicar esta gran república el concepto de Patria.

Todos opinan, como que es necesario estar siempre al lado de la Patria con razón, ó sin razón.

Todos admiten que la Patria no se discute, como no se discuten las madres. Y esto que admiten todos los partidos políticos españoles, no está en el credo de los liberales cubanos. Uno de sus principales órganos en la prensa, indico, no hace mucho tiempo, que el amor a la Patria debe entenderse bajo ciertas condiciones.

Este amor *condicional* puede explicarse por qué los liberales de Cuba consideran, como simples delitos políticos, otros delitos que nosotros consideramos como delitos políticos. En equivocación es que viven los liberales cubanos en el escollo de que habíamos antes, el obstáculo que se interpone entre ellos y nosotros, haciendo imposible toda buena inteligencia en nuestras discusiones.

Ya en otra ocasión, tocando, aunque ligeramente, la cuestión importantísima de los delitos políticos, citamos, si no en la fe de nuestra memoria, estas descorazonadoras palabras de un jurisconsulto cubano:

«Es preciso que sea verificado un trastorno de gran consideración en las ideas humanas, para que los delitos políticos hayan llegado a verse de la manera que se ven en nuestra sociedad.»

Si aquel escritor ilustra se acordaba de la injusticia que la opinión pública concede a los delinquentes políticos, cuando acepta, respecto a sus delitos, la inmutabilidad de los actos consumados, ¿cuál sería un suceso si hubiera podido sospechar que llegarían a ser confundidos en la categoría de delitos políticos aquellos que llama el Código *delitos de traición*?

Pues bien, la prensa liberal de Cuba es víctima de una confusión deplorable; y, por efecto de ella, no solo esconstruye natural y justificable la insurrección separatista de 1895, sino que aplando sin reserva a los que en ella tomaron parte, diciendo que cumplieron con su deber de conciencia, lo cual no puede más de alarmar a los que, aceptando de buena fe el *delito de traición*, y perdonando sinceramente a los que delinquieron, consideran altamente peligroso é inhumano que se santifique un delito, y un delito que, en buena doctrina, no puede caberle a aquéllos con el velo de la política, para conseguir la injusticia que a los delitos políticos suele concederse.

Acabamos de explicar lo que la prensa liberal de este país llama nuestra *intencionalidad*. Pero ¿gamos mal en no querer transferir con un error de doctrina que puede convertirse en un peligro para la integridad de la patria?

No parece que no, y consideramos un deber nuestro disipar la confusión de ideas que reina en los periódicos liberales sobre delitos políticos.

Entendemos por delitos de esta clase los que llevan por objeto subvertir la constitución del Estado.

Esta definición no es nuestra. La tomamos de un célebre tratadista de Derecho Penal, y expresa perfectamente lo que en todos los países civilizados se entiende por delitos políticos.

Para que un delito pueda ser considerado como político, es necesario que proceda de ideas políticas, pero de ideas que se refieren a las políticas internas de un Estado, no a la política exterior, no a la independencia ni a la integridad nacional.

Ahora bien; ¿propusieron los insurrectos de Cuba subvertir simplemente la constitución de España, ó era más trascendental la subversión a que tendían sus esfuerzos? ¿eran defensas de política interna las que los incitaron a la rebelión, ó eran divisiones más profundas las que enredaron aquella odiosa y prolongada guerra?

Oslo parece contestar a estas preguntas. Han transcurrido muy pocos años para que borren de la memoria de los habitantes de Cuba sucesos que nunca olvidaremos bastante. Todos ellos conocen los fines a que tendían las dos últimas insurrecciones; y conociéndolos, no es posible considerar como delinquentes políticos a los que en aquellas tomaron parte. El delito de estos corresponde a distinta categoría, no consistió en atentar interiormente contra la forma del Estado, ni contra su constitución, sino contra la integridad nacional; y la diferencia entre una y otra clase de delitos está elementalmente expresada,

por el jurisconsulto a que antes aludimos, en las palabras siguientes:

«en insalubre ciertos distritos ó barrios. La industria llevará un eficaz cooperación para en determinados lugares de la isla, que hoy presentan repugnancia, etc.»

«...aunque, que todas las formas sociales, es la patria misma; y no es necesario que se seque de intención contra esta cuando son aquellos los términos que la acción criminal. Pero el que delinque contra la seguridad exterior del Estado, se destruye la existencia de la patria misma, y se destruye, no los accidentes, sino la esencia, el ser mismo de la sociedad que le vio nacer. Es un partido público el que comete, para el que difícilmente encontrará, no digamos una justificación, ó una atenuación, pero ni una explicación alguna, que salve al su propósito ni su honra.»

Y no es necesario que el delito cometido por los insurrectos cubanos ha sido cometido en el Código Penal vigente en Cuba en la categoría de los delitos contra el orden público.

Bajo el punto de vista de los hechos, constatamos que esos Códigos no habrían sido promulgados cuando estaban las ideas insurreccionales; y bajo el punto de vista de la doctrina, si hubieran observado que en nada altera la solidez de lo que hemos expuesto, esa modificación del Código, toda vez que en este no se declara, ni mucho menos, que el delito de rebelión sea, en todos los casos que enumera, un delito político; debiendo observar que en el informe de la Comisión que presentó el proyecto de aquel Código, no se explican los motivos de la modificación que estamos ocupándonos, como no se explican los de algunas otras que contiene.

Expuesta la distancia que separa a los delitos propiamente llamados políticos, de esos otros delitos que parecen deberse de conciencia a la prensa liberal cubana, queda explicada nuestra *intencionalidad* en este punto; y estamos seguros de que en esta santa intencionalidad nos acompañan todos los partidos políticos de España.

Todos ellos han aplaudido reentramos las nobles frases del Sr. Cánovas del Castillo, al explicar esta gran república el concepto de Patria.

Todos opinan, como que es necesario estar siempre al lado de la Patria con razón, ó sin razón.

Todos admiten que la Patria no se discute, como no se discuten las madres. Y esto que admiten todos los partidos políticos españoles, no está en el credo de los liberales cubanos. Uno de sus principales órganos en la prensa, indico, no hace mucho tiempo, que el amor a la Patria debe entenderse bajo ciertas condiciones.

Este amor *condicional* puede explicarse por qué los liberales de Cuba consideran, como simples delitos políticos, otros delitos que nosotros consideramos como delitos políticos. En equivocación es que viven los liberales cubanos en el escollo de que habíamos antes, el obstáculo que se interpone entre ellos y nosotros, haciendo imposible toda buena inteligencia en nuestras discusiones.

Ya en otra ocasión, tocando, aunque ligeramente, la cuestión importantísima de los delitos políticos, citamos, si no en la fe de nuestra memoria, estas descorazonadoras palabras de un jurisconsulto cubano:

«Es preciso que sea verificado un trastorno de gran consideración en las ideas humanas, para que los delitos políticos hayan llegado a verse de la manera que se ven en nuestra sociedad.»

Si aquel escritor ilustra se acordaba de la injusticia que la opinión pública concede a los delinquentes políticos, cuando acepta, respecto a sus delitos, la inmutabilidad de los actos consumados, ¿cuál sería un suceso si hubiera podido sospechar que llegarían a ser confundidos en la categoría de delitos políticos aquellos que llama el Código *delitos de traición*?

Pues bien, la prensa liberal de Cuba es víctima de una confusión deplorable; y, por efecto de ella, no solo esconstruye natural y justificable la insurrección separatista de 1895, sino que aplando sin reserva a los que en ella tomaron parte, diciendo que cumplieron con su deber de conciencia, lo cual no puede más de alarmar a los que, aceptando de buena fe el *delito de traición*, y perdonando sinceramente a los que delinquieron, consideran altamente peligroso é inhumano que se santifique un delito, y un delito que, en buena doctrina, no puede caberle a aquéllos con el velo de la política, para conseguir la injusticia que a los delitos políticos suele concederse.

Acabamos de explicar lo que la prensa liberal de este país llama nuestra *intencionalidad*. Pero ¿gamos mal en no querer transferir con un error de doctrina que puede convertirse en un peligro para la integridad de la patria?

No parece que no, y consideramos un deber nuestro disipar la confusión de ideas que reina en los periódicos liberales sobre delitos políticos.

Entendemos por delitos de esta clase los que llevan por objeto subvertir la constitución del Estado.

Esta definición no es nuestra. La tomamos de un célebre tratadista de Derecho Penal, y expresa perfectamente lo que en todos los países civilizados se entiende por delitos políticos.

Para que un delito pueda ser considerado como político, es necesario que proceda de ideas políticas, pero de ideas que se refieren a las políticas internas de un Estado, no a la política exterior, no a la independencia ni a la integridad nacional.

Ahora bien; ¿propusieron los insurrectos de Cuba subvertir simplemente la constitución de España, ó era más trascendental la subversión a que tendían sus esfuerzos? ¿eran defensas de política interna las que los incitaron a la rebelión, ó eran divisiones más profundas las que enredaron aquella odiosa y prolongada guerra?

Oslo parece contestar a estas preguntas. Han transcurrido muy pocos años para que borren de la memoria de los habitantes de Cuba sucesos que nunca olvidaremos bastante. Todos ellos conocen los fines a que tendían las dos últimas insurrecciones; y conociéndolos, no es posible considerar como delinquentes políticos a los que en aquellas tomaron parte. El delito de estos corresponde a distinta categoría, no consistió en atentar interiormente contra la forma del Estado, ni contra su constitución, sino contra la integridad nacional; y la diferencia entre una y otra clase de delitos está elementalmente expresada,

por el jurisconsulto a que antes aludimos, en las palabras siguientes:

«en insalubre ciertos distritos ó barrios. La industria llevará un eficaz cooperación para en determinados lugares de la isla, que hoy presentan repugnancia, etc.»

«...aunque, que todas las formas sociales, es la patria misma; y no es necesario que se seque de intención contra esta cuando son aquellos los términos que la acción criminal. Pero el que delinque contra la seguridad exterior del Estado, se destruye la existencia de la patria misma, y se destruye, no los accidentes, sino la esencia, el ser mismo de la sociedad que le vio nacer. Es un partido público el que comete, para el que difícilmente encontrará, no digamos una justificación, ó una atenuación, pero ni una explicación alguna, que salve al su propósito ni su honra.»

Y no es necesario que el delito cometido por los insurrectos cubanos ha sido cometido en el Código Penal vigente en Cuba en la categoría de los delitos contra el orden público.

Bajo el punto de vista de los hechos, constatamos que esos Códigos no habrían sido promulgados cuando estaban las ideas insurreccionales; y bajo el punto de vista de la doctrina, si hubieran observado que en nada altera la solidez de lo que hemos expuesto, esa modificación del Código, toda vez que en este no se declara, ni mucho menos, que el delito de rebelión sea, en todos los casos que enumera, un delito político; debiendo observar que en el informe de la Comisión que presentó el proyecto de aquel Código, no se explican los motivos de la modificación que estamos ocupándonos, como no se explican los de algunas otras que contiene.

Expuesta la distancia que separa a los delitos propiamente llamados políticos, de esos otros delitos que parecen deberse de conciencia a la prensa liberal cubana, queda explicada nuestra *intencionalidad* en este punto; y estamos seguros de que en esta santa intencionalidad nos acompañan todos los partidos políticos de España.

Todos ellos han aplaudido reentramos las nobles frases del Sr. Cánovas del Castillo, al explicar esta gran república el concepto de Patria.

Todos opinan, como que es necesario estar siempre al lado de la Patria con razón, ó sin razón.

Todos admiten que la Patria no se discute, como no se discuten las madres. Y esto que admiten todos los partidos políticos españoles, no está en el credo de los liberales cubanos. Uno de sus principales órganos en la prensa, indico, no hace mucho tiempo, que el amor a la Patria debe entenderse bajo ciertas condiciones.

Este amor *condicional* puede explicarse por qué los liberales de Cuba consideran, como simples delitos políticos, otros delitos que nosotros consideramos como delitos políticos. En equivocación es que viven los liberales cubanos en el escollo de que habíamos antes, el obstáculo que se interpone entre ellos y nosotros, haciendo imposible toda buena inteligencia en nuestras discusiones.

Ya en otra ocasión, tocando, aunque ligeramente, la cuestión importantísima de los delitos políticos, citamos, si no en la fe de nuestra memoria, estas descorazonadoras palabras de un jurisconsulto cubano:

«Es preciso que sea verificado un trastorno de gran consideración en las ideas humanas, para que los delitos políticos hayan llegado a verse de la manera que se ven en nuestra sociedad.»

Si aquel escritor ilustra se acordaba de la injusticia que la opinión pública concede a los delinquentes políticos, cuando acepta, respecto a sus delitos, la inmutabilidad de los actos consumados, ¿cuál sería un suceso si hubiera podido sospechar que llegarían a ser confundidos en la categoría de delitos políticos aquellos que llama el Código *delitos de traición*?

Pues bien, la prensa liberal de Cuba es víctima de una confusión deplorable; y, por efecto de ella, no solo esconstruye natural y justificable la insurrección separatista de 1895, sino que aplando sin reserva a los que en ella tomaron parte, diciendo que cumplieron con su deber de conciencia, lo cual no puede más de alarmar a los que, aceptando de buena fe el *delito de traición*, y perdonando sinceramente a los que delinquieron, consideran altamente peligroso é inhumano que se santifique un delito, y un delito que, en buena doctrina, no puede caberle a aquéllos con el velo de la política, para conseguir la injusticia que a los delitos políticos suele concederse.

Acabamos de explicar lo que la prensa liberal de este país llama nuestra *intencionalidad*. Pero ¿gamos mal en no querer transferir con un error de doctrina que puede convertirse en un peligro para la integridad de la patria?

No parece que no, y consideramos un deber nuestro disipar la confusión de ideas que reina en los periódicos liberales sobre delitos políticos.

Entendemos por delitos de esta clase los que llevan por objeto subvertir la constitución del Estado.

Esta definición no es nuestra. La tomamos de un célebre tratadista de Derecho Penal, y expresa perfectamente lo que en todos los países civilizados se entiende por delitos políticos.

Para que un delito pueda ser considerado como político, es necesario que proceda de ideas políticas, pero de ideas que se refieren a las políticas internas de un Estado, no a la política exterior, no a la independencia ni a la integridad nacional.

Ahora bien; ¿propusieron los insurrectos de Cuba subvertir simplemente la constitución de España, ó era más trascendental la subversión a que tendían sus esfuerzos? ¿eran defensas de política interna las que los incitaron a la rebelión, ó eran divisiones más profundas las que enredaron aquella odiosa y prolongada guerra?

Oslo parece contestar a estas preguntas. Han transcurrido muy pocos años para que borren de la memoria de los habitantes de Cuba sucesos que nunca olvidaremos bastante. Todos ellos conocen los fines a que tendían las dos últimas insurrecciones; y conociéndolos, no es posible considerar como delinquentes políticos a los que en aquellas tomaron parte. El delito de estos corresponde a distinta categoría, no consistió en atentar interiormente contra la forma del Estado, ni contra su constitución, sino contra la integridad nacional; y la diferencia entre una y otra clase de delitos está elementalmente expresada,

por el jurisconsulto a que antes aludimos, en las palabras siguientes:

«en insalubre ciertos distritos ó barrios. La industria llevará un eficaz cooperación para en determinados lugares de la isla, que hoy presentan repugnancia, etc.»

«...aunque, que todas las formas sociales, es la patria misma; y no es necesario que se seque de intención contra esta cuando son aquellos los términos que la acción criminal. Pero el que delinque contra la seguridad exterior del Estado, se destruye la existencia de la patria misma, y se destruye, no los accidentes, sino la esencia, el ser mismo de la sociedad que le vio nacer. Es un partido público el que comete, para el que difícilmente encontrará, no digamos una justificación, ó una atenuación, pero ni una explicación alguna, que salve al su propósito ni su honra.»

Y no es necesario que el delito cometido por los insurrectos cubanos ha sido cometido en el Código Penal vigente en Cuba en la categoría de los delitos contra el orden público.

Bajo el punto de vista de los hechos, constatamos que esos Códigos no habrían sido promulgados cuando estaban las ideas insurreccionales; y bajo el punto de vista de la doctrina, si hubieran observado que en nada altera la solidez de lo que hemos expuesto, esa modificación del Código, toda vez que en este no se declara, ni mucho menos, que el delito de rebelión sea, en todos los casos que enumera, un delito político; debiendo observar que en el informe de la Comisión que presentó el proyecto de aquel Código, no se explican los motivos de la modificación que estamos ocupándonos, como no se explican los de algunas otras que contiene.

Expuesta la distancia que separa a los delitos propiamente llamados políticos, de esos otros delitos que parecen deberse de conciencia a la prensa liberal cubana, queda explicada nuestra *intencionalidad* en este punto; y estamos seguros de que en esta santa intencionalidad nos acompañan todos los partidos políticos de España.

Todos ellos han aplaudido reentramos las nobles frases del Sr. Cánovas del Castillo, al explicar esta gran república el concepto de Patria.

Todos opinan, como que es necesario estar siempre al lado de la Patria con razón, ó sin razón.

Todos admiten que la Patria no se discute, como no se discuten las madres. Y esto que admiten todos los partidos políticos españoles, no está en el credo de los liberales cubanos. Uno de sus principales órganos en la prensa, indico, no hace mucho tiempo, que el amor a la Patria debe entenderse bajo ciertas condiciones.

Este amor *condicional* puede explicarse por qué los liberales de Cuba consideran, como simples delitos políticos, otros delitos que nosotros consideramos como delitos políticos. En equivocación es que viven los liberales cubanos en el escollo de que habíamos antes, el obstáculo que se interpone entre ellos y nosotros, haciendo imposible toda buena inteligencia en nuestras discusiones.

Ya en otra ocasión, tocando, aunque ligeramente, la cuestión importantísima de los delitos políticos, citamos, si no en la fe de nuestra memoria, estas descorazonadoras palabras de un jurisconsulto cubano:

«Es preciso que sea verificado un trastorno de gran consideración en las ideas humanas, para que los delitos políticos hayan llegado a verse de la manera que se ven en nuestra sociedad.»

Si aquel escritor ilustra se acordaba de la injusticia que la opinión pública concede a los delinquentes políticos, cuando acepta, respecto a sus delitos, la inmutabilidad de los actos consumados, ¿cuál sería un suceso si hubiera podido sospechar que llegarían a ser confundidos en la categoría de delitos políticos aquellos que llama el Código *delitos de traición*?

Pues bien, la prensa liberal de Cuba es víctima de una confusión deplorable; y, por efecto de ella, no solo esconstruye natural y justificable la insurrección separatista de 1895, sino que aplando sin reserva a los que en ella tomaron parte, diciendo que cumplieron con su deber de conciencia, lo cual no puede más de alarmar a los que, aceptando de buena fe el *delito de traición*, y perdonando sinceramente a los que delinquieron, consideran altamente peligroso é inhumano que se santifique un delito, y un delito que, en buena doctrina, no puede caberle a aquéllos con el velo de la política, para conseguir la injusticia que a los delitos políticos suele concederse.

Acabamos de explicar lo que la prensa liberal de este país llama nuestra *intencionalidad*. Pero ¿gamos mal en no querer transferir con un error de doctrina que puede convertirse en un peligro para la integridad de la patria?

No parece que no, y consideramos un deber nuestro disipar la confusión de ideas que reina en los periódicos liberales sobre delitos políticos.

Entendemos por delitos de esta clase los que llevan por objeto subvertir la constitución del Estado.

Esta definición no es nuestra. La tomamos de un célebre tratadista de Derecho Penal, y expresa perfectamente lo que en todos los países civilizados se entiende por delitos políticos.

Para que un delito pueda ser considerado como político, es necesario que proceda de ideas políticas, pero de ideas que se refieren a las políticas internas de un Estado, no a la política exterior, no a la independencia ni a la integridad nacional.

Ahora bien; ¿propusieron los insurrectos de Cuba subvertir simplemente la constitución de España, ó era más trascendental la subversión a que tendían sus esfuerzos? ¿eran defensas de política interna las que los incitaron a la rebelión, ó eran divisiones más profundas las que enredaron aquella odiosa y prolongada guerra?

Oslo parece contestar a estas preguntas. Han transcurrido muy pocos años para que borren de la memoria de los habitantes de Cuba sucesos que nunca olvidaremos bastante. Todos ellos conocen los fines a que tendían las dos últimas insurrecciones; y conociéndolos, no es posible considerar como delinquentes políticos a los que en aquellas tomaron parte. El delito de estos corresponde a distinta categoría, no consistió en atentar interiormente contra la forma del Estado, ni contra su constitución, sino contra la integridad nacional; y la diferencia entre una y otra clase de delitos está elementalmente expresada,

por el jurisconsulto a que antes aludimos, en las palabras siguientes:

«en insalubre ciertos distritos ó barrios. La industria llevará un eficaz cooperación para en determinados lugares de la isla, que hoy presentan repugnancia, etc.»

«...aunque, que todas las formas sociales, es la patria misma; y no es necesario que se seque de intención contra esta cuando son aquellos los términos que la acción criminal. Pero el que delinque contra la seguridad exterior del Estado, se destruye la existencia de la patria misma, y se destruye, no los accidentes, sino la esencia, el ser mismo de la sociedad que le vio nacer. Es un partido público el que comete, para el que difícilmente encontrará, no digamos una justificación, ó una atenuación, pero ni una explicación alguna, que salve al su propósito ni su honra.»

Y no es necesario que el delito cometido por los insurrectos cubanos ha sido cometido en el Código Penal vigente en Cuba en la categoría de los delitos contra el orden público.

Bajo el punto de vista de los hechos, constatamos que esos Códigos no habrían sido promulgados cuando estaban las ideas insurreccionales; y bajo el punto de vista de la doctrina, si hubieran observado que en nada altera la solidez de lo que hemos expuesto, esa modificación del Código, toda vez que en este no se declara, ni mucho menos, que el delito de rebelión sea, en todos los casos que enumera, un delito político; debiendo observar que en el informe de la Comisión que presentó el proyecto de aquel Código, no se explican los motivos de la modificación que estamos ocupándonos, como no se explican los de algunas otras que contiene.

Expuesta la distancia que separa a los delitos propiamente llamados políticos, de esos otros delitos que parecen deberse de conciencia a la prensa liberal cubana, queda explicada nuestra *intencionalidad* en este punto; y estamos seguros de que en esta santa intencionalidad nos acompañan todos los partidos políticos de España.

Todos ellos han aplaudido reentramos las nobles frases del Sr. Cánovas del Castillo, al explicar esta gran república el concepto de Patria.

Todos opinan, como que es necesario estar siempre al lado de la Patria con razón, ó sin razón.

Todos admiten que la Patria no se discute, como no se discuten las madres. Y esto que admiten todos los partidos políticos españoles, no está en el credo de los liberales cubanos. Uno de sus principales órganos en la prensa, indico, no hace mucho tiempo, que el amor a la Patria debe entenderse bajo ciertas condiciones.

Este amor *condicional* puede explicarse por qué los liberales de Cuba consideran, como simples delitos políticos, otros delitos que nosotros consideramos como delitos políticos. En equivocación es que viven los liberales cubanos en el escollo de que habíamos antes, el obstáculo que se interpone entre ellos y nosotros, haciendo imposible toda buena inteligencia en nuestras discusiones.

Ya en otra ocasión, tocando, aunque ligeramente, la cuestión importantísima de los delitos políticos, citamos, si no en la fe de nuestra memoria, estas descorazonadoras palabras de un jurisconsulto cubano:

«Es preciso que sea verificado un trastorno de gran consideración en las ideas humanas, para que los delitos políticos hayan llegado a verse de la manera que se ven en nuestra sociedad.»

Si aquel escritor ilustra se acordaba de la injusticia que la opinión pública concede a los delinquentes políticos, cuando acepta, respecto a sus delitos, la inmutabilidad de los actos consumados, ¿cuál sería un suceso si hubiera podido sospechar que llegarían a ser confundidos en la categoría de delitos políticos aquellos que llama el Código *delitos de traición*?

Pues bien, la prensa liberal de Cuba es víctima de una confusión deplorable; y, por efecto de ella, no solo esconstruye natural y justificable la insurrección separatista de 1895, sino que aplando sin reserva a los que en ella tomaron parte, diciendo que cumplieron con su deber de conciencia, lo cual no puede más de alarmar a los que, aceptando de buena fe el *delito de traición*, y perdonando sinceramente a los que delinquieron, consideran altamente peligroso é inhumano que se santifique un delito, y un delito que, en buena doctrina, no puede caberle a aquéllos con el velo de la política, para conseguir la injusticia que a los delitos políticos suele concederse.

Acabamos de explicar lo que la prensa liberal de este país llama nuestra *intencionalidad*. Pero ¿gamos mal en no querer transferir con un error de doctrina que puede convertirse en un peligro para la integridad de la patria?

No parece que no, y consideramos un deber nuestro disipar la confusión de ideas que reina en los periódicos liberales sobre delitos políticos.

Entendemos por delitos de esta clase los que llevan por objeto subvertir la constitución del Estado.

Esta definición no es nuestra. La tomamos de un célebre tratadista de Derecho Penal, y expresa perfectamente lo que en todos los países civilizados se entiende por delitos políticos.

Page 1 of 1000. Content includes various advertisements, news snippets, and classifieds. Key sections include: LAS HOP BITTERS, AGENTE DE SAN JACOB, P. N. YEROS, MIYARES Y CP., N. GELATS Y CP., T. RUIZ Y CP., J. BANCOS, J. BALCELLS Y CP., J. BORJES Y CP., J. MARZAN H., E. P. D., and various medical and legal notices.

